1. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 23 de noviembre de 2009 de la Secretaría General de Educación, por la que se ordena la publicación del Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Gobierno de Cantabria para fomentar entre la comunidad educativa el conocimiento de los principios y valores del sistema de la Seguridad Social y promover la ciudadanía entre el alumnado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y, en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

RESUELVO

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del "Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Gobierno de Cantabria para fomentar entre la comunidad educativa el conocimiento de los principios y valores del sistema de la Seguridad Social y promover la ciudadanía entre el alumnado."

Santander, 24 de noviembre de 2009.—El secretario general, Ricardo Rasilla Pacheco.

PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN Y EL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA FOMENTAR ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL CONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PROMOVER LA CIUDADANÍA ENTRE EL ALUMNADO

En Santander, a 8 de octubre de 2009.

Reunidos:

De una parte, don Octavio J. Granado Martínez, Secretario de Estado de la Seguridad Social, nombrado mediante Real Decreto, 480/2008, de 14 de abril, y los directores generales de las Entidades Gestoras y Servicio Común de la Seguridad Social radicados en el ámbito territorial del Protocolo General que se circunscribe a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

De otra parte, la excelentísima señora doña Rosa Eva Díaz Tezanos, consejera de Ecuación del Gobierno de Cantabria, en nombre y representación de éste, con NIF S-3933002B y con sede en calle Vargas, 53, 7.ª planta, 39010 Santander, expresa y previamente facultada para la firma del presente Protocolo General y autorizada la celebración del mismo por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de septiembre de 2009.

Intervienen:

Los señores don Octavio J. Granado Martínez, don Fidel Ferreras Alonso, don Javier Aibar Bernad, y doña Pilar López-Rioboo Ansorena, en nombre y representación, respectivamente, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina, haciendo uso de las facultades que les confieren el RD 1129/2008, de 4 de julio y los artículos 57.1.a), 59.1, 63.1 y Disposición Adicional Decimonovena, todas ellas del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social; así como la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Y doña Rosa Eva Díaz Tezanos, consejera de Educación en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Las partes se reconocen recíprocamente capacidad legal para obligarse, en la calidad en que intervienen en este acto, y otorgar el presente Protocolo General, y a tal efecto,

EXPONEN

I. Que, al amparo del Protocolo General de colaboración suscrito el 2 de marzo de 2007 entre el Ministerio de Educación y Ciencia (hoy Ministerio de Educación), y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (hoy Ministerio de Trabajo e Inmigración) para la educación en materia de Seguridad Social, quieren desarrollarse mediante este Convenio Marco las previsiones establecidas en la Cláusula Octava de dicho Protocolo referida a la participación de otras Administraciones Públicas, que faculta al Ministerio de Trabajo e Inmigración y a los organismos de él dependientes para suscribir acuerdos y convenios específicos con las Comunidades Autónomas.

II. Que, por otra parte, hoy día se constata un amplio consenso social sobre la relación directa que existe entre la educación que reciben nuestros menores y jóvenes y su comportamiento futuro como ciudadanos, constituyendo la escuela, junto con la familia, una institución básica para la integración social, la adquisición de valores y habilidades sociales para la convivencia, tomando como base el objetivo de la igualdad de oportunidades desde los requisitos de mérito y capacidad.

III. Que de acuerdo con los puntos anteriores, ambas partes comparten el objetivo común de fomentar entre la ciudadanía, a partir de la educación en sus distintas etapas, el conocimiento de nuestro Sistema Nacional de la Seguridad Social, entendido como uno de los pilares del modelo de protección social pública en España, junto con el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional de Dependencia, objetivos éstos recogidos, por otra parte, en las más significativas normas legales y reglamentarias de nuestro ordenamiento jurídico, así como en la normativa aplicable de la Unión Europea.

IV. En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece entre los principios que deben inspirar el sistema educativo, la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, el ejercicio democrático, la solidaridad y la observación del entorno social y de las necesidades, ocupaciones y servicios de la vida en comunidad así como la defensa de pautas de conducta que induzcan el rechazo y condena de aquellas acciones antisociales o de cualquier forma de fraude contra la colectividad o interés general. Para ello, sitúa todas estas prioridades en el propio currículo educativo que debe incluir entre otros aspectos, el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los Estados y sociedades democráticas, sus fundamentos, modos de organizarse y funcionamiento. Asimismo, merecen particular atención los derechos y deberes reconocidos en las Declaraciones internacionales, en la Constitución Española y en la legislación autonómica, así como su aplicación por las diversas organizaciones que conforman nuestra arquitectura institucional.

V. Que en los presupuestos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina, se contemplan los créditos necesarios para financiar las actividades informativas y divulgativas que en aplicación de este Convenio deban realizar los funcionarios de dichas entidades en los centros escolares que resulten seleccionados.

VI. Que en virtud de lo expuesto, ambas partes, reconociéndose capacidad completa y suficiente para intervenir en este acto, proceden a formalizar el presente Protocolo General, de naturaleza administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público y en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a las siguientes:

ACUERDAN

Primero. Objeto.

El presente Protocolo General tiene por objeto establecer el marco conceptual de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Educación para impulsar y promover acciones en el ámbito educativo, que fomenten entre los jóvenes y adultos el conocimiento del Sistema de la Seguridad Social y los derechos y obligaciones que en materia de Seguridad Social les corresponde conocer y ejercitar como ciudadanos.

Segundo. Fines.

Los fines del presente Protocolo General son los siguientes:

1. Diseñar estrategias coordinadas en las que intervengan las partes implicadas con el objeto de profundizar en el conocimiento de los principios democráticos, entendiendo que la cooperación, la solidaridad, la igualdad y la proporcionalidad son principios rectores que informan nuestro Sistema de Seguridad Social.

2. Desarrollar la Recomendación Séptima del informe de la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que considera un elemento relevante que el ciudadano pueda acceder a la información comprensible y fiable a cerca de las perspectivas a largo plazo de su sistema de protección social y en especial de las prestaciones sociales a las que puede aspirar.

3. Potenciar el conocimiento de la Seguridad Social, favoreciendo el ejercicio de los derechos que los jóvenes pueden ejercitar al incorporarse al mercado de trabajo y el cumplimiento de las obligaciones.

4. Adecuar el conocimiento de los jóvenes y adultos sobre nuestro modelo de protección social en consonancia con la evolución que está experimentando la sociedad española, entre ellos los relativos a la integración de personas con discapacidad y de los ciudadanos procedentes de otros países en el mercado laboral.

5. Promover actividades educativas que permitan mejorar el conocimiento de niños y jóvenes sobre los pilares del sistema de protección social y la contribución de la Seguridad Social a la vertebración del Estado del Bienestar.

6. Impulsar la elaboración y difusión de materiales didácticos aplicados a la formación y la educación sobre las prestaciones reconocidas al amparo de la Ley General de la Seguridad Social.

7. Dotar de criterios psicopedagógicos comunes a las actuaciones derivadas de la aplicación del presente Protocolo General en los centros escolares.

8. Establecer encuentros periódicos entre el profesorado y funcionarios de la Seguridad Social para el intercambio de conocimientos y experiencias profesionales.

9. Favorecer fórmulas de conocimiento de las Instituciones de la Seguridad Social mediante visitas periódicas a las instalaciones de las Entidades del Sistema de Seguridad Social.

10. Coordinar los esfuerzos de las Administraciones implicadas y comprometer a los centros escolares en la incorporación a su proyecto educativo y al currículo escolar de una visión integrada del Estado Social y Democrático de Derecho reconocido por la Constitución española.

11. Introducir mecanismos estables de comunicación entre la comunidad educativa y los expertos en materia de Seguridad Social, creando grupos de tutores que asesoren a los jóvenes una vez finalizado el ciclo educativo y pase incorporarse al mercado de trabajo.

Tercera. Actuaciones.

Para conseguir dichos fines se considera necesario llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Contribuir a que los contenidos curriculares de las distintas etapas educativas incluyan aspectos relativos al funcionamiento del Sistema de Seguridad Social.

- Definir unos instrumentos pedagógicos que orienten al profesorado sobre los derechos y obligaciones que comporta el Sistema Nacional de Seguridad Social en España.

- Dedicar una especial atención a la formación de los equipos directivos escolares puesto que asumirán el papel de impulsores y dinamizadores de las iniciativas en los centros educativos.

- Aportar información y conocimientos prácticos que generen en el alumnado destrezas, actitudes, hábitos y valores dirigidos a su incorporación a la vida activa como ciudadanos.

- Apoyar y difundir el conocimiento del Sistema de Seguridad Social mediante la elaboración de materiales didácticos y crear un apartado específico en el portal de Internet de la Seguridad Social.

- Favorecer la proyección pública de estas actuaciones, así como las iniciativas y buenas prácticas que surjan en los distintos ámbitos territoriales de vigencia del presente Protocolo General.

- Fomentar actuaciones dirigidas a la formación e información que recibe la ciudadanía, en general, desde la educación no reglada a fin de concienciar sobre la mejora de la calidad de vida, reforzando el compromiso de solidaridad que conlleva la Seguridad Social, así como cualquier otra no incluida en los puntos anteriores, cuya consecución se considere de interés y que contribuya a perfeccionar los objetivos del presente Protocolo General.

Cuarta. Comisión de seguimiento.

Para el desarrollo de lo establecido en este Protocolo General y para velar por su seguimiento se establece una Comisión de Seguimiento compuesta por tres representantes de cada Institución.

Por parte del Ministerio de Trabajo:

- Director Provincial del INSS o persona en quien delegue.

- Dos técnicos de esa Dirección Provincial

Por parte de la Consejería de Educación:

- La consejera de Educación, o persona en quien delegue.

- Dos asesores técnicos de la Consejería de Educación.

Dicha Comisión tendrá como funciones:

1. Programar las acciones a desarrollar en los distintos ámbitos de actuación: desarrollo curricular, formación del profesorado, proyectos de innovación y elaboración de materiales.

2. Estimular la difusión de materiales y experiencias en materia de Seguridad Social

3. Realizar el seguimiento y valoración anual de las actuaciones contempladas en el presente protocolo general.

4. Promover nuevas iniciativas desde procesos de análisis y valoración de la acción.

Quinta. Vigencia y prórroga.

El presente Protocolo General entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración anual, entendiéndose prorrogado de forma automática, salvo denuncia expresa por cualquiera de las instituciones, que deberá realizarse por escrito y con un mes de antelación de la fecha prevista para la finalización.

Una vez firmado, el presente Convenio será publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Sexta. Publicidad.

Ambas administraciones se comprometen a intercambiar, confeccionar y editar, según sus posibilidades económicas, conjuntamente publicaciones y materiales didácticos relacionados con el Sistema de Seguridad Social, para, de esta manera, contribuir al desarrollo y aplicación de los proyectos curriculares en los centros educativos. Los materiales que genere el presente Protocolo General llevarán los anagramas de la Administración Autónoma y del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Séptima. Jurisdicción contencioso-administrativa.

Todas las cuestiones que pudieran surgir en la interpretación o desarrollo de este Protocolo General serán resueltas por los firmantes o por personas en quien deleguen o, en su defecto y dado el carácter administrativo de este Acuerdo, en el marco de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Y estando conformes las partes con el contenido del presente Acuerdo, y para que así conste firman, por cuádruplicado, en el lugar y fecha indicados al comienzo.

Santander, 24 de noviembre de 2009.—El secretario general, Ricardo Rasilla Pacheco.

09/17255

2. AUTORIDADES Y PERSONAL

2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES

Bases para la provisión, mediante concurso-oposición, de dos plazas de personal laboral, Operario de Servicios Múltiples, categoría Oficial 2ª y Peón, respectivamente para consolidación de empleo temporal, incluidas en la oferta de empleo público de 2009.

Por resolución de la Alcaldía nº 60/2009, de 20 de noviembre de 2009, se han aprobado las siguientes bases comunes de selección de personal laboral, vacante en la plantilla municipal, que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91.2 de la Ley 7/1985, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a publicar.

Bases para la provisión, mediante concurso-oposición, de dos plazas de Personal Laboral, Operario de Servicios Múltiples, categoría Oficial 2ª y Peón, respectivamente para consolidación de empleo temporal, incluidas en la oferta de empleo público de 2009

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de dos plazas de personal laboral operario/a de servicios múltiples, categoría oficial 2ª y peón, respectivamente, incluidas en la oferta de empleo público de 2009, desempeñadas actualmente por personal laboral indefinido a las que, por lo tanto, resulta de aplicación lo establecido en la Disposición Transitoria 4ª del Estatuto Básico del Empleado Público, (Ley 7/2007, de 12 de abril), que, con un carácter excepcional, regula la consolidación de empleo temporal.

Segunda.- Principio de igualdad de trato.

La convocatoria cumplirá con el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley 7/2007, de 12 de abril,

del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

A la presente convocatoria le serán de aplicación asimismo las disposiciones contenidas en la Ley 7/2007, de 12 de abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen reglas básicas y programas mínimos a que han de ajustarse los procedimientos de selección de los funcionarios de la Administración Local; con carácter supletorio, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; y demás normas concordantes.

Las presentes Bases serán publicadas íntegramente en el B.O.C. y, de modo extractado, en el B.O.E.. Los sucesivos anuncios relativos a los procedimientos selectivos serán objeto de publicación del modo indicado en estas Bases para cada uno de los diferentes trámites del proceso selectivo.

Tercera.- Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selección, será necesario:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados, a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se haya definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

También podrá participar el cónyuge de los españoles o de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de veintinueve años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad.

c) No padecer enfermedad o estar afectado por limitación física o psíquica que impida o sea incompatible con el desempeño de las funciones de las plazas a cubrir.

d) Estar en posesión del título de Graduado escolar o similar.

e) Teniendo en cuenta la necesidad de emplear maquinaria y vehículos en el desempeño del puesto de trabajo se deberá disponer por los aspirantes de carnet de conducir tipo B.

f) No haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio de cualquiera Administraciones Públicas, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.

g) Haber abonado los derechos de examen que se fijan en las bases específicas de cada convocatoria según establece el artículo 4º de la vigente ordenanza fiscal municipal.

Tanto estas condiciones como las específicas que pudieran señalarse en el anexo I de las presentes bases, así como los méritos que se aleguen a efectos de valoración en el proceso selectivo estarán referidas, como fecha límite, a la de finalización del plazo de presentación de instancias.

Cuarta.- Presentación de instancias.

1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se formularán por escrito, conforme al modelo que se indica en el anexo II de las presentes bases, y se pre-